

LA ESPERANZA NO BASTA

Lorena Alfaro

El pasado primero de julio, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República de México con la ventaja más amplia en una elección presidencial desde 1982, sumando el respaldo de 30,1 millones de votantes. Cualquier análisis objetivo de lo que ha sucedido con la nueva administración del Gobierno federal debe partir del reconocimiento de esta realidad, así como de las razones que la hicieron posible, empezando por la esperanza de generar cambios radicales para resolver casi de inmediato problemas que nuestro país ha arrastrado durante décadas.

En consecuencia, la de por sí monumental responsabilidad jurídica y administrativa de López Obrador como titular del Ejecutivo se ve profundizada incluso más por el peso de esa esperanza que despertó entre aquellos que le confiaron con su voto la definición del rumbo del país.

El discurso *obradorista* fue el mismo que ha promovido la izquierda mexicana desde su refundación, es decir, la idea de que la corrupción y la pobreza en México son consecuencia directa de la mala actuación del poder ejecutivo y que la llegada de un “buen líder” sería suficiente para cambiar las cosas.

Aún el primero de diciembre, en los discursos del nuevo presidente y en la convicción de sus seguidores estaba consolidada la certeza de que el cambio de Gobierno sería suficiente para cambiar de raíz lo que está mal en la República, de ahí el enfoque en el concepto de la *Cuarta Transformación* y la utilización sistemática de las figuras de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas incluso en la publicidad oficial.

Sin embargo, tras unas semanas del nuevo Gobierno, la realidad de la vida política empieza a resquebrajar esa esperanza, porque en el mundo real de la Administración Pública no basta con dar una indicación, proclamar buenas intenciones o nuevas ideas para resolver un problema, especialmente cuando se trata de fenómenos tan complejos como los de la economía, la seguridad pública y el combate a la corrupción y la pobreza.

¿El problema? Que lo que parece obvio en el discurso del opositor se vuelve más complejo al gobernar, porque cada acción del presidente y de su equipo, sin importar sus buenas o malas intenciones, tiene una multitud de efectos colaterales, muchos de los cuales pueden resultar incluso peores que el problema que se pretende resolver.



Tras unas semanas del nuevo Gobierno de AMLO, la realidad de la vida política empieza a resquebrajar esa esperanza

Tal es el caso de la crisis generada por el desabasto de gasolina en buena parte del país: López Obrador en campaña prometió un combate drástico en contra de la corrupción y un impulso decidido a PEMEX como símbolo del régimen revolucionario al que tanto recurre para legitimar su agenda. De ahí que es comprensible que haya decidido combatir el robo de combustible (huachicol) generado principalmente desde las instalaciones de PEMEX y por extracción ilegal de ductos.

Esta medida ha tenido gran respaldo social debido a que el robo de combustible es una de las causas de la violencia generalizada que se vive en el país y que además representa un grave costo en vidas y recursos económicos. Sin embargo, la implementación de la medida ha sido un desastre, la reducción en la importación de combustibles y el cierre de ductos sin prever logística alterna eficaz de distribución ha generado un caos nacional, incertidumbre y desestabilización en la vida cotidiana de los ciudadanos que tienen que hacer filas por horas para obtener apenas unos cuantos litros de gasolina, además de los incalculables daños a la economía en general y, lo peor, sin ninguna detención o denuncia sobre posibles responsables.

Esa brecha entre la facilidad del discurso y la dificultad de la implementación se repite con el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: en campaña AMLO coqueteó con la idea de cancelar el proyecto; ya en el Gobierno decidió hacerlo, lo que ha implicado la necesidad de *recomprar* bonos, de forma que los inversionistas recuperan su dinero, mientras que la sociedad paga por un aeropuerto que nunca se construirá, además de perder lo que hubiera sido uno de los aeropuertos más importantes del mundo.

Otro caso es el de la inseguridad y específicamente las ejecuciones, que se incrementaron drásticamente durante las primeras semanas del nuevo Gobierno, dando al traste con la promesa de pacificación que arrastró Obrador durante los meses de campaña. Y así la lista sigue con otras insensateces como la creación de la figura institucional de delegados, despidos injustificados del SAT, pretender crear una Guardia Nacional militarizada, eliminar recursos destinados a la inversión para crear programas clientelares, presentación de peligrosas iniciativas de reformas constitucionales y un largo etcétera.

Al final del día, la lección que comienza a surgir de entre las primeras ruinas de la nueva Administración federal es que no bastan los discursos o buenas intenciones, por el contrario, si el nuevo Gobierno no aprende (rápido) a entender los matices y a tomar en cuenta los efectos de sus decisiones y de la implementación de políticas públicas, los siguientes seis años tendrán un costo muy alto en perjuicio de la economía, la democracia y el debilitamiento de las instituciones del país.

El peor de ellos será el de la esperanza, esa que no basta para cambiar, pero que cuando queda defraudada se convierte en una deuda que nunca se podrá cubrir.